

CRÓNICAS

PREMIO NACIONAL DE PAZ

CRÓNICAS

PREMIO NACIONAL DE PAZ



CRÓNICAS. PREMIO NACIONAL DE PAZ

© Friedrich Ebert Stiftung en Colombia -Fescol-

© C3 - Centro de Competencia en Comunicación
para América Latina y el Caribe

© Marta Ruiz

Calle 71 N° 11-90

Teléfono: 57 (1) 3473077. Fax: 57 (1) 2173115

Correo electrónico: fescol@fescol.org.co

www.fescol.org.co

Primera edición

Bogotá D. C., noviembre de 2010

ISBN: 978-958-8677-02-6

Producción editorial

Éditer Estrategias Educativas Ltda.

ctovarleon@gmail.com

Diseño carátula: Camila Cesarino Costa

Fotografía de carátula: Augusto Rosas

Impresión: Editorial Gente Nueva

Impreso en Colombia / Printed in Colombia

CONTENIDO

PRÓLOGO	
UNA PAZ ESQUIVA	VII
LOS SOBERANOS	1
<i>Patricia Nieto</i>	
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA	19
<i>Nelson Fredy Padilla Castro</i>	
LOS HIJOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO	33
<i>Luis Alberto Miño Rueda</i>	
EL ARDUO CAMINO DE LA RECONCILIACIÓN	53
<i>Margarita Martínez Escallón</i>	
MONTES DE MARÍA: PASÓ LA MUERTE PERO NO EL OLVIDO	67
<i>José Alejandro Castaño</i>	
BATALLA SIN FIN POR UNA FÁBRICA DE CHOCOLATE	79
<i>Marisol Gómez Giraldo</i>	
LOS HIJOS DE LA GAITANA SIGUEN CRECIENDO	89
<i>José Navia</i>	
UNA DIÓCESIS EN MEDIO DEL OLVIDO	103
<i>Alejandra de Vengoechea</i>	
MADRES CORAJE	115
<i>María Teresa Ronderos</i>	

LA FAMILIA AUSENCIA <i>Cristian Valencia</i>	131
CUADROS DE ESPERANZA EN SAN VICENTE DEL CAGUÁN <i>Pilar Lozano</i>	145
EL ENFERMERO DE LOS SECUESTRADOS <i>Alberto Salcedo Ramos</i>	161
"HERMANO PARA SIEMPRE" <i>Marta Ruiz</i>	187
VOLVER A EMPEZAR <i>Sandra Janer</i>	199

PRÓLOGO

UNA PAZ ESQUIVA*

En Colombia se han explorado muchos caminos para la paz. En las últimas dos décadas se han firmado varios pactos de negociación entre grupos armados y gobierno. Han sido, por lo general, acuerdos entre las cúpulas de poder que han llevado en ocasiones a pactos políticos importantes que, sin embargo, no han significado casi nunca la pacificación de los territorios.

El desarme del M-19, el PRT, el EPL, el Quintín Lame, y la CRS a principios de los años noventa desembocó en la transformación del marco institucional del país, con la Constitución de 1991. Sin mediadores, sin sociedad civil, estas negociaciones fueron pactos de desarme a cambio de garantías para la integración a la vida social y política, que se dieron en un clima particular. Veníamos de una violencia atroz y desconocida: la del narcoterrorismo. Indiscriminada, masiva y brutal, había doblegado a una parte del Estado y la sociedad. Por encima de esa violencia anárquica, cuyo móvil era la codicia, emergía una violencia política encarnada en los guerrilleros y en un Estado que había abusado en múltiples ocasiones de su fuerza.

* Las crónicas publicadas en este libro fueron escritas durante el segundo semestre del año de 2009.

En contraste con la mafia, y en clara diferenciación con ella, los insurgentes y el gobierno hallaron en el acuerdo, en la concertación y en diálogo unos puntos de encuentro. La reforma de la Constitución y el mutuo perdón se abrió como camino imperativo para seguir adelante. Los adversarios se reconocieron como tales y se sentaron a la mesa a pactar una nueva constitución. La esperanza de una transición y de un nuevo pacto social colmó por lo menos momentáneamente las expectativas de un país que en ese entonces se identificó con la paz.

Pero la pacificación estaba lejos. No logró que se cerrara el capítulo de la rebelión insurgente. Por el contrario, mientras un sector de la política colombiana se encaminaba hacia el esquivo pluralismo y la consolidación de un Estado de derecho, las guerrillas que siguieron en armas se afincaron aún más en sus estrategias de guerra. Tanto el ELN como las Farc, pero especialmente estas, subordinaron cualquier movimiento y participación política a un plan para la toma del poder por las armas.

De otro lado, una serie de factores confluyeron para que los grupos paramilitares, otrora fraccionados y con dinámicas muy locales, se articularan en un proyecto nacional en el que hicieron simbiosis la violencia del narcotráfico, la de las élites políticas y económicas que se resistían a la modernización del país, y la de sectores derechistas que consideraban que las guerrillas podían ser derrotadas sólo si se las combatía con sus mismas armas.

Fue así como a finales de los noventa, un país bañando en sangre y agobiado por la pesadilla de las masacres, la toma de pueblos, los magnicidios y las desapariciones, se avocaba a una nueva negociación: la del Caguán. El escenario era completamente diferente al anterior. Para las Farc el diálogo no era más que un arma de acumulación en la guerra. Para el Estado, una manera de ganar tiempo y terreno mientras, con el Plan Colombia, las fuerzas armadas retomaban la iniciativa militar.

Mientras este juego de espejos se desarrollaba en los confines del país, con una puesta en escena dilatada y llena de incertidumbre, fuera de ese territorio surrealista donde se negociaba lo innegociable, el país vivía una orgía de muerte. En esos terribles años las víctimas

silenciosas esperaban a ver el desenlace. La geografía del país se transmutaba, con el desplazamiento; los ríos arrastraban decenas y miles de muertos. Los cementerios no podían guardar más sus NN. La esperanza de pacificación se diluyó en nuevas formas de violencia y su extensión a rincones del territorio donde no existía.

La regla general es que la sociedad civil ha sido un convidado de piedra en estas negociaciones, en las que el concepto de reconciliación ha sido apenas mencionado. El concepto de la paz como un pacto de élites ha sido revaluado por la experiencia. En Colombia cada pacto ha dejado violencias residuales que han hecho imposible el desarme total. Y ello ha sido así desde el Frente Nacional, firmado para ponerle fin a la guerra política con la alternancia del gobierno, y bajo cuya sombra creció la guerra insurgente, pasando por la negociación con las guerrillas de los años ochenta, cuyo legado tardío fue la nueva Constitución, pero que, por ser un pacto inconcluso e imperfecto, dejó abiertas las puertas de la guerra, que se agudizaría y tocaría fondo desde mediados de los noventa.

Quizá por esa triste condición, la sociedad civil empezó a crear sus propias experiencias de paz, muchas veces en contra del gobierno, que monopoliza este tipo de búsquedas. La idea de que las comunidades pueden hacer mucho por la paz, sin anuencia ni apoyo del Estado ha resultado incómoda en muchos momentos, pero ha mostrado un camino que tarde o temprano será valorado como lo que es, el cimiento de la reconciliación. Han sido personas anónimas, valientes y bien intencionadas quienes desde diferentes puntos de la geografía han hecho un concepto de paz integral que incluye frecuentemente el desarrollo, la búsqueda de un ejercicio pluralista y sano de la política y los derechos humanos. Miles y decenas de estas experiencias han florecido en el país, aún en los momentos más aciagos de la violencia. Se mantienen a pesar de los embates que reciben de los grupos violentos, o incluso a pesar de las propias desavenencias que surgen en su interior, como es natural en las obras humanas.

Justamente el Premio Nacional de Paz surge como un reconocimiento a la paz y la reconciliación que se construyen desde la base, en lo local, y no a la paz maximalista, tan esquiva como errática en el país.

Hay que reconocer que muchos de estos proyectos han estado animados, abiertamente o tras escena, por miembros de la Iglesia. Sacerdotes, monjas y grupos religiosos que han sido más que una mano amiga, casi un Estado de bienestar en zonas inhóspitas y olvidadas donde sólo ha llegado el hacha del colono, la coca, la violencia de los grupos armados y la bota militar del gobierno.

La mayor parte de los premios han sido otorgados en un período en el que desde el gobierno, y en especial el de Álvaro Uribe Vélez, se niega la existencia del conflicto y, por ende, de la negociación, y el país le ha apostado todos sus esfuerzos económicos y políticos a aceptar su maquinaria de guerra, confiado en que la Seguridad Democrática podrá derrotar a los grupos armados. Las comunidades muestran otra realidad y otro camino. Otra realidad, porque dan cuenta, como lo hace este libro, de que la crisis humanitaria persiste y las poblaciones están amenazadas por muchas fuentes de violencia nuevas y antiguas. Las mismas Farc que se dan por derrotadas, y los mismos paramilitares que se dan por desmovilizados.

Por eso, sin excepción, el relato presente de cada uno de los proyectos premiados es de lucha. Por la supervivencia, por la legitimidad, por abrirse espacio y ser visible en medio de una nube discursiva que niega el conflicto que ellos viven cada día.

Las comunidades han mostrado un camino diferente al de la muerte. Han construido conceptos más participativos de la seguridad y han elevado ideales como la democracia, el bienestar colectivo y el pluralismo, como estandartes de sus organizaciones. También hay individuos a los que se les ha premiado justamente porque su labor solitaria y tenaz se ha convertido en paradigma y ejemplo de resistencia o solidaridad.

No puede decirse que los premios de paz hayan logrado la pacificación de sus regiones. Sería mucho pedir. Pero sí han trazado una ruta y se han convertido en la primera piedra que tarde o temprano servirá para edificar un proyecto de reconciliación nacional. Un horizonte que parece todavía lejano.

MARTA RUIZ
EDITORA

LOS HIJOS DE LA GAITANA

SIGUEN CRECIENDO

JOSÉ NAVIA*

La Guardia Indígena del Cauca recibió también el Premio Nacional de Paz en 2004. Durante ese año este proyecto se consolidó y le mostró al país el valor de la movilización colectiva pacífica a través de las mingas, y de su labor cotidiana en defensa de su territorio.

* José Navia nació en Popayán y es comunicador social, especializado en periodismo urbano en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Durante 19 años fue periodista de planta del diario *El Tiempo*, de Bogotá, donde se desempeñó como cronista de la Edición Dominical, y Editor de Reportajes. Por algunos de estos trabajos ha sido galardonado con premios como el Rey de España (2007), el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP (2007), el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB (1992-1996) y el Premio Nacional de Crónica y Reportaje de la Universidad de Antioquia (2000), entre otros. José Navia es autor de tres libros: *El lado oscuro de las ciudades*, de Intermedio Editores, *Confesiones de un delincuente*, de Intermedio Editores e *Historias nuevas para la ropa vieja* de la Editorial Universidad de Antioquia. Navia ha sido catedrático de las universidades Pontificia Bolivariana de Medellín y Central, Sergio Arboleda y Javeriana, de Bogotá.

Sofía Valencia apareció hacia las cinco de la tarde por el camino sin pavimentar que viene de Tacueyó. Salvo por el bluyín y las botas de caucho, Sofía parecía haber salido de una aldea de guerreros de Gengis Khan: menuda, cabello negro y lacio, ojos rasgados, rostro cobrizo, impávido, de pómulos salientes. Mirada fría y desconfiada. —Buenas Buenas dijo a manera de saludo. Estiró la mano, pero desvió su mirada hacia el lugar donde Koda, el perro criollo de color tabaco, daba gruñidos de bienvenida.

En estas tierras ningún indígena Nasa —y Sofía Valencia lo es hasta los tuétanos a pesar de tener apellido de aristócrata payanesa— le mira la cara a un forastero cuando lo saluda. Los blancos y mestizos que pisan por primera vez estas montañas del norte del Cauca asumen ese gesto como una descortesía. Pero a los Nasa, que rigen su vida por las costumbres ancestrales y por la aspereza de sus montañas, los tiene sin cuidado el protocolo occidental. Para ellos, el instante del saludo encarna algo mucho más profundo: es la oportunidad para calibrar el talante del recién llegado. Buenas El indígena siente la energía de la otra persona y, a veces, se da cuenta de si trae buenas o malas intenciones —me explicó hace unos meses Ezequiel Vitonás, uno de los principales líderes nasas del norte del Cauca.

Buenas Entren y se sientan, que deben venir cansados —nos dijo Sofía Valencia, aún sin levantar la mirada. Luis Alberto Menza y su compañera, Ninfa Ulcué, los dos guardias indígenas que me acompañaban en este recorrido, enviados por la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ACIN (*Cxab Wala Kiwe* en lengua Nasa), se sacudieron el polvo recogido en la carretera, ingresaron a la sala y depositaron sus morrales en el piso de madera rústica.

Había esperado durante más de una hora a que llegara Sofía Valencia. Aunque la presencia de los enviados de la ACIN relajaba el ambiente, la mujer se mostró incrédula y desconfiada cuando le expliqué el motivo de mi viaje: Buenas Queremos contar cómo es la vida de una persona que forma parte de la Guardia Indígena y qué ha pasado con la guardia desde que se ganó el Premio Nacional de Paz, hace cinco años. Pero no queremos contar la historia de un líder, sino de un guardia común y corriente, como usted, doña Sofía, que trabaja, que atiende a su familia pero que, además, defiende el territorio, el resguardo que su pueblo heredó de sus ancestros, como hacen otros miles de guardias en Toribío, en Jambaló, en Tierradentro... en todo el Cauca —le dije.

No me creyó. Sus ojos, solo sus ojos, se movieron hacia el enviado de la ACIN, que permanecía sentado en una banca de madera, a mi derecha. Menza, que ejerce como coordinador regional de la Guardia Indígena en esta zona, avaló mis palabras con un movimiento de cabeza y le echó un corto discurso sobre los beneficios políticos que traía para la Guardia una publicación de este tipo.

Entonces, Sofía Valencia sonrió de forma casi imperceptible y abandonó la postura algo tensa que mantenía desde nuestra llegada. Esa era la señal de que podía seguir adelante con la entrevista; porque cuando un indígena es renuente a participar de algo, no hay manera alguna de que hable: entra en un silencio de sepulcro, o se hace el que no entiende, o dice ignorar todo lo que se le pregunta, o —si uno intenta forzarlo— lo puede mandar para el carajo de manera áspera.

La casa donde vive Sofía Valencia es en ladrillo y bahareque, con techo de zinc, de dos aguas. Está ubicada en las afueras del corregimiento de Tacueyó, en el municipio de Toribío, a orillas de una carretera por la que transitan, sobre todo, niños con uniformes escolares e indígenas en motocicletas. En la parte posterior, la vivienda tiene una huerta de hortalizas y un balconcito con una chambrana de madera desde donde se ve correr un río de aguas presurosas, al pie de una montaña, en cuyas laderas pastan algunas reses.

Sofía Valencia vive con su esposo, un hombre silencioso que tiene nombre de ejecutivo paisa, Héctor Fabio Villegas, y cuatro

de sus cinco hijos: Juan, de 13 años; Carlos, de 16; Cesar, de 18, y Angélica, de 23. El mayor, Edison, se casó y vive en Mondomo, un municipio cercano.

Sofía se sienta en una butaca de madera. Dice que hay que dejar desacalorar el cuerpo por lo menos una hora antes de ducharse. Mientras tanto, cuenta que su esposo debe estar por llegar de un cultivo de café que tienen frente a la vereda Gargantillas, a media hora a pie. Allá también siembran yuca, fríjol, arracacha y rascadera.

—¿Y qué es rascadera? —le pregunto.

—Una raíz parecida a la yuca —explica.

Sofía se despidió de su esposo en la mañana y se fue para la vereda El Triunfo. Allí, la mujer limpió potreros durante todo el día, al rayo del sol, como parte de un sistema llamado intercambio de jornales, que consiste en que cinco o diez vecinos trabajan durante un día en la propiedad de alguno de ellos. La jornada siguiente la hacen en la tierra de otro miembro del grupo. De esa manera todos tienen mano de obra sin sacar un peso del bolsillo.

Angélica, la hija de Sofía, enciende un radio de pilas, del tamaño de una panela, y sintoniza la emisora comunitaria que acapara casi toda la audiencia de la región: *Radio Nasa*, 99.4 en FM. La voz de Eliseo Herrera, de los Corraleros del Majagual, irrumpe en la sala. Sofía le hace señas a su hija para que le baje volumen al aparato. Suenan otros dos o quizá tres discos bailables y enseguida se oye un servicio social: Cayetano Yule, de la vereda El Zarzal, recomienda a quien haya visto un potro colorado... alguien se lo sacó anoche del potrero. Pide que se lo devuelvan porque es la única bestia que tiene para trabajar.

Enseguida suenan más canciones bailables.

Angélica desaparece por unos minutos, dos o tres a lo sumo, y regresa con un bastón de madera del largo de un brazo, adornado por un manojo de cintas con los colores verde y rojo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la organización que cobija a todos los resguardos de ese departamento. Sofía Valencia alarga la mano derecha para tomar el bastón que la distingue como miembro de la Guardia Indígena del norte del Cauca, organización galardonada con el Premio Nacional de Paz en el 2004. —El verde representa

a las montañas y el rojo, la sangre derramada por nuestros líderes asesinados por defender los derechos de los indígenas —dice Sofía, como si estuviera dando una tarea escolar.

Son casi las 6 de la tarde. A lo lejos, hacia el occidente, el firmamento se pinta de tonos anaranjados, desde uno muy leve, diluido en amarillo, hasta uno encendido, que parece fundirse con la silueta oscura de las montañas. Héctor Fabio Villegas entra en silencio. Saluda con timidez y va a sentarse en el fondo del patio. Sofía se levanta a preparar café.

Mientras atiza el fogón, cuenta que ella no sabe leer ni escribir. —Como a los dos días de haber entrado a la escuela mi papá cogió un libro y me dijo: ‘Lea aquí, a ver qué fue lo que aprendió’, y como no podía, me daba rejo. Yo mejor me retiré y me puse a trabajar. Ahora, mirando los libros de los muchachos, es que aprendí a firmar, pero no más —dice.

A las seis en punto, como todos los días, *Radio Nasa* transmite el Himno Nacional. Un coro escolar lo canta en nasa yuwe, el idioma de los nasa o paeces.

Sofía dice que es guardia desde hace ocho años. En esta zona la Guardia comenzó a organizarse en el 2001. —En esa época no sabíamos bien qué era la Guardia. Nos metimos no más para cuidar el territorio porque decían que los grupos armados se iban a meter a llevarse a los hombres para matarlos... ya habían desaparecido a gente del pueblo.

La historia de lo que ocurrió en esos años circula entre algunos habitantes de Tacueyó, un caserío de fachadas blancas en su mayoría, incrustado en el corazón de la Cordillera Central. En este lugar es posible recoger los fragmentos dispersos que dan cuenta del surgimiento de la Guardia Indígena. Según los relatos, el punto de partida fue la desaparición de Israel Vitonás, de 28 años, estudiante de cuarto año de bachillerato y conductor de la chiva del pueblo. Todo comenzó hacia las 8 de la noche del 30 de octubre de 1999. A esa hora tres hombres le atravesaron una camioneta gris de cuatro puertas al carro que conducía Vitonás entre El Palo y Tacueyó, lo bajaron encañonado con revólveres y se lo llevaron en la camioneta.

Un hombre que viajaba con él les llevó la noticia a los familiares. En el pueblo le atribuyeron el secuestro a los paramilitares y eso los frenó para iniciar la búsqueda de inmediato. Salieron al día siguiente. Más de 300 indígenas bajaron de las montañas en camiones, chivas y motos. —Volteamos por Corinto, Miranda... buscamos en los cañaduzales, por la orilla del río Palo, por las montañas de Florida... ¡Nada! —dice Arquímedes Vitonás, hermano del desaparecido y quien encabezó la búsqueda.

Lo buscaron durante un mes sin hallar el menor rastro. Y sin esperanza, porque en la región todos sabían que los paramilitares no mantienen personas secuestradas. Las asesinan. Si la víctima está de buenas, recibe un tiro en la cabeza. Si no, es sometida a torturas inimaginables.

La búsqueda languidecía cuando desapareció Nepomuceno Campo Largo, un indígena agricultor de la vereda La Cruz. Nadie supo cómo se lo llevaron. Simplemente desapareció.

Al que sí vieron, casi un año después, fue a Saulo Mosquera, de 35 años, un comerciante de papa y ganado. Testigos les contaron a los indígenas que los paramilitares lo encañonaron en una estación de gasolina de Santander de Quilichao y lo metieron en un carro.

—Cada vez que desaparecían a alguno salíamos a la loca, a buscar pa'riba y pa'bajo. Buscábamos todo el día y dormíamos en chozas, en medio de los cañaduzales o donde nos agarrara la noche. La gente por donde pasábamos nos regalaba comida, yuca, plátanos; pero la mayoría de las veces aguantábamos hambre —recuerda Arquímedes Vitonás.

A Saulo Mosquera lo buscaron durante más de tres semanas y tampoco apareció. Mientras tanto, los médicos indígenas (*tewalas*) hacían rituales nocturnos, con rezos y hierbas, para protegerlos y para saber si los desaparecidos seguían vivos. —Un día los *tewalas* nos dijeron: “no los busquen más” —dice Vitonás.

Para entonces, hasta Tacueyó llegaban las noticias de otros indígenas desaparecidos por los paramilitares del Bloque Calima. En medio de ese ambiente, el cabildo de Tacueyó citó a la comunidad de las 32 veredas a una asamblea para pensar en un sistema de seguridad para los comuneros (miembros del resguardo). —Si no nos

organizamos nos van a llevar a todos, uno por uno —dijo alguien. Después de discutir durante varias horas, decidieron crear uno o dos grupos de voluntarios por cada vereda. Ellos se encargarían de vigilar las entradas al resguardo y avisar si ocurría algo extraño.

—Como no teníamos plata para comprar radios, usamos postas, unos indígenas jóvenes que corrían a avisar a la vereda más cercana y ahí arrancaba a correr otro muchacho con la noticia de lo que hubiera pasado. Después a alguien se le ocurrió usar ‘cuetones’ —dice Arquímedes Vitonás.

Los ‘cuetones’ no son más que cohetes de pólvora negra, de los mismos que usaban en las veredas durante las festividades religiosas y de diciembre. La vereda que escuchaba el estallido lanzaba otro al aire y así, en pocos minutos, todo el resguardo estaba enterado de que algo estaba pasando, y se alistaba para salir. —Taponamos las carreteras que venían de El Palo y de Corinto y nos turnábamos para controlar la entrada de extraños... allí comenzamos a tener roces. Primero con la misma comunidad porque los requisábamos y les pedíamos papeles para entrar y salir del resguardo; y después con los milicianos y con la guerrilla, porque querían andar pa’rriba y pa’bajo como si esto fuera de ellos —cuenta Vitonás.

Los indígenas llegaron, incluso, a tratar de construir una puerta de ladrillo y cemento para ingresar a su territorio, con una cadena administrada por la naciente guardia cívica, como la llamaban en esa época. Desistieron de la idea el día en que la guerrilla dinamitó los cimientos del portal. Un año después consiguieron 18 radios de comunicación. —La guerrilla nos quitó algunos radios porque decían que con eso le dábamos información al Ejército, y el Ejército nos decomisó otros porque decía lo mismo sobre la guerrilla —dice Vitonás.

Con el apoyo del Consejo Regional Indígena del Cauca, los miembros de la guardia comenzaron a estudiar la historia de sus ancestros y los derechos que tenían sobre su territorio. Algunos líderes fueron a contar su experiencia a otros resguardos del departamento del Cauca donde los ‘paras’ también habían desaparecido a indígenas. Así se fue extendiendo la Guardia Indígena por los 12 resguardos (hoy son 19) del norte del Cauca.

Sofía Valencia fue una de las primeras en acudir al llamado del cabildo de Tacueyó para conformar la guardia en la vereda La Playa, donde habita. Varios de sus vecinos también se inscribieron, sobre todo los jóvenes. Al principio comenzaron a vigilar a los forasteros, a hacer reuniones en las veredas más alejadas y asumieron tareas sociales, como ayudar a trasladar al hospital a personas enfermas.

Diecinueve meses después de la improvisada búsqueda de Israel Vitonás, el Consejo Regional Indígena del Cauca lanzó oficialmente la Guardia Indígena de los resguardos de Tacueyó, San Francisco y Toribío. Sofía Valencia fue una de los dos mil guardias a los que les tomó juramento Anatolio Quirá, consejero mayor de CRIC, el 28 de mayo del 2001.

—De la playa bajamos como ochenta personas hasta El Tierrero. Era como un día de fiesta... todos los guardias llevábamos los bastones; el mío yo misma lo había hecho con un palo de flor amarillo. Lo corté, le quité la cáscara, lo puse a secar como quince días y, con ayuda de mis hijos, le abrí dos huecos con una broca y le puse dos cordones para cargarlo sin que me estorbe —dice.

Sofía pasó las noches siguientes a su posesión junto a una guadua, en el puesto de control que los indígenas montaron en El Boquerón, en la carretera que viene de Corinto. Desde esa época, los cabildos —máxima autoridad de los resguardos— le entregaron a la Guardia la responsabilidad de garantizar la seguridad de las asambleas, para evitar que los grupos armados se llevaran a algún comunero. También comenzó a controlar las fiestas comunales, el cierre de cantinas y el ingreso de extraños a los poblados indígenas.

Alguien toca a la puerta de Sofía Valencia hacia las nueve de la noche. Los ladridos de Koda alertan a los habitantes de la casa. Angélica pregunta: —¿Quién es? —Desde afuera, alguien da un nombre que no alcanzo a escuchar, pero que debe inspirar confianza porque la muchacha quita la tranca y abre la puerta. Son tres guardias, un hombre y dos mujeres. Todos jóvenes, como entre los 15 y 18 años. Están de ronda en la vereda La Playa. Ellos saben de la presencia de un periodista de Bogotá y quieren asegurarse de que todo está bien.

Los guardias dicen que la ronda es normal, pero dos días después me entero en Santander de Quilichao, donde está la sede de la

ACIN, de que en las zonas rurales de Tacueyó se mueven milicianos de las Farc. Los guardias permanecen alerta para evitar que los armados recluten a más jóvenes del resguardo.

Cuando los guardias se van, unos diez minutos después, Sofía Valencia, su esposo y sus hijos trancan puertas y ventanas y se van a dormir. Al día siguiente, antes de las siete, la mujer sale de su casa rumbo a Tacueyó. Lleva su bastón colgado del hombro derecho.

En un salón del colegio de Tacueyó, Ezequiel Vitonás se alista para dictar una charla a los guardias. Llegan unos ochenta. Todos traen sus bastones y un cuaderno para tomar notas. Afuera, mientras tanto, media docena de mujeres y hombres alistan un fogón para preparar el almuerzo de los asistentes. El evento comienza con el himno del pueblo paez. La autora de la letra es una profesora de Jambaló, asesinada por la guerrilla hace más de 20 años. Todos se ponen de pie. Sofía Valencia entona la letra desde una de las últimas bancas del salón.

*Yo que soy hijo del Cauca,
llevo sangre de Paez,
de los que siempre han luchado
de la conquista hasta hoy.
De los que siempre han luchado
de la conquista hasta hoy...
Vivimos porque peleamos
contra el poder invasor
y seguiremos peleando
mientras no se apague el sol...*

Al terminar, los guardias esperan en silencio. De pie y con sus bastones en la mano. El encargado del sonido introduce otro CD y enseguida suena, como un estallido, el himno de la Guardia Indígena:

*¡Guardia... ! ¡Guardia... !
¡Fuerrrrza...! ¡Fuerrrrza...!
¡Por mi raza...! ¡Por mi tierra!*

A pesar de los rostros adustos, a los guardias se les nota la emoción que les produce la letra del himno y la música de instrumentos andinos de percusión y cuerdas.

*Indios que con valentía,
y fuerza y en sus corazones,
por justicia y pervivencia,
hoy empuñan los bastones.*

Una de las estrofas del himno me recuerda la charla del día anterior con Luis Alberto Menza, uno de los guardias más curtidos del norte del Cauca. Menza no guarda esperanzas de morir de viejo. Tampoco algunos de los guardias que hoy cantan en el taller.

*Pa' delante compañeros,
dispuestos a resistir.
Defender nuestros derechos,
así nos toque morir...*

Ezequiel Vitonás les dice a los asistentes que el primer paso para fortalecer a la Guardia Indígena es asistir a las capacitaciones. Y les recuerda un pensamiento del padre Álvaro Ulcué, asesinado en 1984. —Debemos ser un pueblo consciente y no una partida de ovejas que se va por donde las ‘arríen’ —les dice.

Luego, el dirigente se remonta a los orígenes de la Guardia Indígena. El primer antecedente fueron las huestes paeces que organizó la cacica La Gaitana, en 1535, para resistir al ejército invasor del conquistador español Sebastián de Belalcázar. Les habla de los caciques Manuel de Quilo y Ciclos, y de Juan Tama, este último un personaje mítico, que, según Vitonás, aprendió a leer y escribir en español, en 1700, y le escribió al Rey de España para pedirle una reserva “donde los indígenas se autogobiernen”. Tama definió, además, los linderos de las tierras que les entregó la corona de España.

El antecedente más reciente lo constituye Manuel Quintín Lame, un indígena que luchó por los derechos de los indígenas con los códigos, pero también organizó un movimiento armado que se tomó varias poblaciones del Cauca y puso en jaque a la aristocracia payanesa a principios del siglo pasado.

Durante el taller se ventilan varios temas relacionados con el futuro de la Guardia. Uno de ellos es el mandato del XIII Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca, según el cual, las comunidades indígenas van a dedicar buena parte de sus esfuerzos crear la Guardia

Indígena Nacional. Esta iniciativa pretende que la mayor parte de los 84 pueblos indígenas que existen en Colombia tengan una guardia articulada con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que cobija a casi todas las organizaciones indígenas del país.

Desde su nacimiento en Tacueyó, la Guardia Indígena se ha extendido a algunas comunidades embera chamí de Caldas; ingas y kamentsa, del Putumayo, y awá de Nariño. En el Cauca, donde habitan unos 200 mil paeces, guambianos, totoroos, coconucos, yanacunas y siapiraras, la Guardia Indígena ha copado casi todos los resguardos.

Cuando terminó la primera parte del taller, el almuerzo ya estaba listo en un caldero de aluminio de casi un metro de alto. Los asistentes hicieron fila; a cada uno le entregaron un plato hondo para la sopa, una cuchara y una tasa para el agua de panela. Cada indígena lava luego sus trastos y los deposita en una batea. Es una pequeña muestra de la logística de cocina que los Nasa ponen a funcionar cuando realizan congresos o movilizaciones de cinco o diez mil personas.

Por la tarde, algo somnolientos, los indígenas se enteraron de que en el Cauca hay unos diez mil guardias y en Colombia ya alcanzan los 15 mil. Solo en los resguardos del norte del Cauca hay unos 4.500. Como parte de la capacitación, los guardias aprenden que sus funciones son, especialmente, vigilar el movimiento de personas extrañas dentro de su territorio; cuidar los sitios sagrados, como páramos y lagunas; acompañar a las comunidades que queden atrapadas en medio del conflicto, prestar seguridad en asambleas y congresos y capacitar a los más jóvenes para que luego ingresen a la Guardia.

Todos los jóvenes de los resguardos están obligados a prestar un servicio social en la Guardia Indígena durante dos años.

En este tipo de talleres, los guardias más nuevos se enteran de algunas gestas en las que ha participado el organismo al cual pertenecen. Allí les cuentan, por ejemplo, que la guardia ubicó en las selvas del Pacífico los cadáveres de ocho de sus hermanos Awá asesinados por las Farc en enero pasado; que hace cinco años logró liberar de las manos de ese mismo grupo al entonces alcalde de Toribío, Arquí-

medes Vitonás; que ha realizado docenas de búsquedas de personas desaparecidas; que se ha enfrentado a la guerrilla y al propio Ejército cuando estos combaten cerca de las casas de los civiles; que ha erradicado laboratorios de pasta de coca; que ha desenterrado caletas con explosivos de las Farc y que, entre otras cosas, les presta seguridad a los líderes amenazados por la guerrilla y los paramilitares.

Ante el ánimo belicoso de algunos jóvenes, que en otras épocas se enrolaban fácilmente en los grupos guerrilleros y que a veces claman por responder con violencia a los ataques de los grupos armados (la guerrilla mató a unos ochenta indígenas entre el 2000 y el 2009), los encargados de capacitar a la Guardia Indígena les resaltan que la guardia es un organismo de paz y de solidaridad, guiado por el pensamiento de sus mayores, y que sus únicas armas son los bastones de madera.

Hacia las cuatro de la tarde, Sofía Valencia y sus compañeros abandonaron el salón de clase. El coordinador de la Guardia Indígena de Tacueyó, Marcelino Moscué, de 35 años, ofrece llevarla hasta su vereda en la moto Auteco 125 que le entregó el cabildo para que cumpla con sus funciones. El viaje dura unos 15 minutos. Koda la saluda en la puerta. La mujer cuelga el bastón en un clavo de la pared y les pregunta a sus hijos si ya llegó Héctor Fabio.

Dos horas más tarde, Sofía Valencia, una de las guardias más veteranas de la vereda La Playa, atiza de nuevo las brasas de la hornilla.